

Gonzalo Rodríguez F.
Director Techo-Chile



La emergencia que nadie niega

Llamar “gobierno de emergencia” a la nueva administración causa disputa. Sus partidarios dicen que el país sufre una crisis de seguridad, economía y desarrollo social. El gobierno anterior, en cambio, afirma que la situación está normalizada tras el estallido y la pandemia, citando mejoras en la tasa de homicidios, inflación y pobreza. Pero hay una emergencia que nadie niega: el más de medio millón de personas sin adecuado acceso a la vivienda. En 2022, el Congreso aprobó el Plan de Emergencia Habitacional, y en diciembre lo extendió por cuatro años más, mandando al nuevo gobierno a profundizarlo. ¿Cuáles son los retos? En primer lugar, el número de viviendas. El gobierno saliente superó las 260 mil soluciones habitacionales comprometidas. Esta meta era levemente superior a lo que se venía realizando previamente, pero haberla superado nos permite apuntar a logros más ambiciosos, como la construcción de 400 mil nuevas unidades. Segundo, los campamentos. El plan buscaba reducir el déficit en estos asentamientos en todo el país, pero quedó corto. El Ministerio de Vivienda solo entregó 25 mil de las 40 mil soluciones prometidas; apenas el 60%. Tras dieciséis años de aumento en el número de familias en campamentos, las herramientas de hace dos décadas ya no sirven ante los cambios urbanísticos, demográficos y migratorios. Dos de cada tres familias en campamentos son pobres, y allí viven más de 80 mil niños y adolescentes. Dicha complejidad ilustra la necesidad de una nueva estrategia. En tercer lugar, las catástrofes. Es positivo que el nuevo ministro de Vivienda comprometa plazos de reconstrucción exigentes, pero, en vistas de que desde 2010 a la fecha, un desastre golpea cada dos años a alguna región del país, quizás el Estado necesite un organismo dedicado solo a esta tarea permanente. Nuestra historia demuestra que las emergencias las enfrentamos mejor cuando estamos todos juntos, cuando compartimos los diagnósticos, pero sobre todo la urgencia. La emergencia habitacional no es la excepción. La inauguración de un nuevo gobierno es también una oportunidad para recuperar el trabajo de la sociedad civil — severamente dañada por el “caso Convenios” —, empresas, gobiernos regionales y locales, para que en 2030 todos en Chile tengan un lugar dónde vivir.